

Publicación de resoluciones sancionadoras deportivas. Informe 550/2006

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la publicación de la totalidad de las sanciones impuestas en materia de disciplina deportiva por las respectivas federaciones deportivas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas derivadas de las sanciones en esta materia y su necesario conocimiento por terceros.

Como cuestión previa, debe indicarse que no todos los datos relacionados con la imposición de este tipo de sanciones se encontrará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Ello se funda en el hecho de que el párrafo primero del artículo 2.1 de la Ley delimita su ámbito de aplicación, disponiendo que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal únicamente, según el artículo 3 a), “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Según el artículo 58 de la Ley andaluza 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte “Serán sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, a título de dolo, culpa o simple negligencia”.

De este modo, los datos correspondientes a sanciones cuyo destinatario no sea un persona física, por ejemplo aquellas por las que se sanciona a un club deportivo con el cierre de sus instalaciones, no se encontrarán sometidas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Una vez delimitado el alcance de la aplicación de la Ley Orgánica, debe igualmente diferenciarse entre el contenido de la Resolución sancionadora y el de la sanción efectivamente impuesta, habida cuenta que es posible que en la resolución aparezcan datos relacionados con personas físicas distintas del sancionado, por ejemplo, en su caso, testigos o peritos.

En este caso, debe recordarse que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Pues bien, teniendo en cuenta los términos de la consulta, la divulgación de esos datos, referidos a personas distintas de la propia sancionada, podría resultar excesivo en relación con la finalidad de publicidad que se pretende, por lo que dichos datos no deberían ser objeto de divulgación, debiendo, en su caso, aparecer adecuadamente anonimizados.

En tercer lugar, la divulgación de los datos a los que se refiere la consulta no puede fundamentarse en lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Dicho precepto se limita a establecer un supuesto excepcional que habilita el tratamiento sin consentimiento del afectado de los datos relacionados con su ideología, afiliación sindical, religión o creencias por parte de las entidades a las que el sujeto pertenece en atención a dicha información. En particular, el propio precepto exige en estos casos el consentimiento expreso y por escrito del afectado para que las citadas entidades puedan comunicar los datos a un tercero.

De este modo, el precepto no resultaría aplicable, al tratarse de una cesión de datos que no guardan relación con los planteados en la consulta.

Por ello, debe considerarse que el régimen de tratamiento y cesión de los datos referidos a la comisión de infracciones se someterá al régimen general establecido en la Ley Orgánica 15/1999, si bien con la especialidad, en cuanto a la legitimación para la creación de ficheros de esta naturaleza, consagrada por el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras”.

Ello no implicará que los datos no puedan ser accesibles por terceros cuando la Ley lo permita, sino que no será lícita la creación por quien no ostenta la competencia de ficheros relacionados con esas infracciones.

Dicho todo esto, la transmisión de los datos derivada de la publicación constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) cuando exista una norma con rango de Ley que otorgue cobertura a la cesión. Del mismo modo, no sería preciso el consentimiento, según el artículo 11.2 c), “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”, si bien “En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte dedica su Título XI a la regulación de la disciplina deportiva, no estableciendo previsión directa o indirecta acerca de la publicidad de las sanciones impuestas.

No obstante, se establecen en el artículo 79 determinadas sanciones cuya imposición implicará necesariamente el conocimiento de los datos por parte de terceros para que puedan hacerse realmente efectivas.

Así sucederá con las sanciones de clausura del recinto deportivo, prohibición de acceso al estadio, pérdida de la condición de socio y celebración de la competición deportiva a puerta cerrada, amonestación pública, inhabilitación temporal de dos meses a un año, destitución del cargo, descenso de categoría o expulsión, temporal o definitiva, de la competición profesional, previstas en el citado precepto.

Estas sanciones se encuentran igualmente recogidas en los artículos 66 y 77 a 79 de la Ley 6/1998.

Sin embargo la imposición de dichas sanciones no implica necesariamente una publicidad general de las mismas, salvo en el caso de amonestación pública, sino que su conocimiento debería producirse por los sujetos que tienen la necesidad de conocerlas.

De este modo, el acceso a la información debería, en principio, limitarse a los restantes implicados en la competición en cuyo seno se produce la infracción o al personal que deba garantizar la efectividad de la sanción

De este modo, la divulgación de los datos de las sanciones impuestas únicamente podría considerarse amparada por lo dispuesto en el artículo 11-2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con las normas reguladoras de las sanciones en materia de disciplina deportiva en cuanto la publicidad se derive de la propia naturaleza de la sanción impuesta y exclusivamente en cuanto la sanción sea conocida por quienes tengan la obligación de aplicarla o por los restantes participantes en la competición, pero dichos preceptos no ampararían una divulgación general y pública de la sanción, salvo en el caso de la amonestación pública.

Por otra parte, el artículo 75 de la Ley 10/1990 dispone que “las disposiciones estatutarias o reglamentarias de los Clubes deportivos que participen en competiciones de ámbito estatal, Ligas profesionales y Federaciones deportivas españolas, dictadas en el marco de la presente Ley, deberán prever, inexcusablemente y en relación con la disciplina deportiva, los siguientes extremos (...)

- a) Un sistema tipificado de infracciones, de conformidad con las reglas de la correspondiente modalidad deportiva, graduándolas en función de su gravedad.

- b) Los principios y criterios que aseguren la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las infracciones, la proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas, la inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, la aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su comisión.

- c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infracciones, así como las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad del infractor y los requisitos de extinción de esta última.
- d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de sanciones.
- e) El sistema de recursos contra las sanciones impuestas”.

Este precepto habilita, en consecuencia, a las federaciones deportivas a establecer un sistema de sanciones en el que podrá expresamente hacerse constar, a través de la correspondiente norma estatutaria, la publicación de la sanción impuesta.

De este modo, en caso de que el deportista se integrase en la correspondiente federación para llevar a cabo la práctica del deporte y los estatutos de la propia federación previesen expresamente que, en caso de imposición de sanciones en materia de disciplina deportiva, la adscripción a la federación implicaría la aceptación y libre asunción por parte del deportista del hecho de que las sanciones serán objeto de la debida publicidad, lo que permitiría considerar el supuesto incardinado en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

De todo lo señalado hasta aquí cabe concluir que:

- Las limitaciones a la publicidad de las resoluciones sancionadoras únicamente se fundarán en la Ley Orgánica 15/1999 en relación con los datos de personas físicas.
- Asimismo, deberá garantizarse la anonimización de los datos referidos a quienes no sean objeto de la sanción.
- El artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 habilitará la comunicación de los datos de la sanción exclusivamente a quienes necesiten conocerla para lograr su efectivo cumplimiento y a los restantes participantes en la competición, salvo que la sanción sea de amonestación pública, en cuyo caso podrá procederse a su publicación.
- En los restantes supuestos y en relación con otros destinatarios, sólo será posible la cesión de los datos en caso de que así se prevea en los Estatutos de la correspondiente federación deportiva, por aplicación del artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.